

Imperio y narcocapitalismo

Introducción

A LO LARGO de la historia de la expansión imperial, los voceros de los imperios han buscado justificar la conquista de los pueblos y la explotación de los recursos citando “altos principios”. En el siglo XIX, los ingleses describieron el pillaje de Asia y África como parte de “la carga del hombre blanco” por llevar la civilización a los “pueblos oscuros”. Los franceses argumentaron que su conquista estaba motivada por el deseo de llevar los frutos de la cultura francesa a los pueblos atrasados.

En el siglo XX, con el ascenso de las conquistas imperiales estadounidenses, en particular en el hemisferio occidental, un “tono de alta moral” similar fue adoptado para justificar la intervención militar estadounidense en defensa de sus banqueros en Santo Domingo, empresas plataneras en América Central y monopolios petroleros en México. Estas intervenciones fueron justificadas como “defensa del orden y la estabilidad” y la “protección de las vidas de los ciudadanos estadounidenses”. Al inicio de la Revolución mexicana, el presidente Woodrow Wilson justificó la intervención imperial estadounidense en nombre de la “democracia” y el “orden”. Después de la Revolución rusa, Washington encontró un nuevo pretexto para la intervención: el “anticomunismo” y la “amenaza rusa”. Con el fin de la Guerra Fría y la caída del comunismo soviético, Washington recurre a la “amenaza de la droga” para justificar su intervención y control sobre las policías y los funcionarios de seguridad en América Latina.

Surge la pregunta: ¿por qué Washington tiene que esconder los verdaderos intereses económicos, políticos y militares de su intervención detrás de los altos principios morales? Fundamentalmente porque Estados Unidos es una democracia imperial. La retórica moral se utiliza para convencer o neutralizar a la opinión pública nacional. Mientras que la política exterior de Estados Unidos está dirigida en gran parte a servir a las TNC, los políticos que aplican esa política requieren de votos. De ahí el doble discurso de la política estadouni-

dense: la búsqueda práctica de la dominación para la elite económica y la retórica moralista para asegurar la legitimidad electoral. Como todos los poderes imperialistas, Washington siempre presenta su intervención violenta como medida “defensiva” de “seguridad nacional”. De ahí que el apoyo financiero y político de terroristas mercenarios (la Contra en Nicaragua) y de militares genocidas en Guatemala y El Salvador se justificara con el argumento de la “seguridad nacional”, dado que, divulgaban, los indígenas y campesinos eran capaces de constituir una amenaza de invasión a Estados Unidos. Por supuesto que la realidad era diferente: el pueblo y las naciones de América Central no sólo estaban amenazados, sino que también eran atacados por las políticas intervencionistas de Washington. El fin de la Guerra Fría fue una señal para que Washington intensificara su proyecto de construcción imperial. La guerra del Golfo, la invasión de Panamá, la pequeña guerra en Somalia, la expansión de la OTAN hacia Europa del Este y la proyección de un Nuevo Orden Mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos fueron parte de este esfuerzo por crear un imperio global.

Por supuesto que los competidores europeos y Japón no aceptaron fácilmente quedar subordinados a Estados Unidos. En América Latina, importantes luchas sociopolíticas surgieron como desafío del intento por imponer un Nuevo Orden Mundial basado en el capitalismo salvaje llamado “neoliberalismo”. En Colombia, México y Perú estaban activos los movimientos guerrilleros campesinos; en Bolivia, Paraguay, Ecuador y Brasil surgieron significativos movimientos campesinos. En Venezuela y Argentina, los levantamientos urbanos y las huelgas sindicales lograron el apoyo popular. La amenaza desde abajo al consenso de la elite neoliberal apoyado por Estados Unidos llevó a Washington a la búsqueda de una nueva ideología para apoyar su intervención a través del ejército y la policía. La doctrina de la lucha contra el narcotráfico sirvió al propósito de construcción imperial de Washington. En primera instancia disfrazó las políticas represivas y explotadoras de Washington detrás de un propósito de alta moral. Así se neutralizó la opinión pública nacional. En segundo lugar, la lucha en contra de los narcotraficantes permitió a Washington penetrar las fuerzas de seguridad internas de América Latina y establecer su propia agenda política. En tercer lugar, la “guerra al narcotráfico” permitió a Washington tener acceso directo a la sociedad, impulsando su agenda económica y la contrainsurgencia. Al dirigir la lucha en contra del narcotráfico hacia América Latina y hacia el campo, Washington fue capaz de asestar golpes en contra de movimientos sociales potencialmente revolucionarios. Si Washington verdaderamente estuviera interesado en los problemas del tráfico de drogas prestaría atención a lo interno: a los grandes bancos internacio-

nales que lavan la mayor parte del dinero de la droga; arrestaría a la policía corrupta que acepta sobornos de la droga; invertiría más en educación anti-drogas. Crearía trabajos dignos para los grupos marginados que se convierten en distribuidores de drogas. La decisión de mirar hacia el extranjero y hacia abajo en vez de hacia adentro y hacia arriba, es una decisión política, un requerimiento imperial.

Un análisis objetivo del tráfico de drogas tendría que concluir que el tema es esencialmente un problema de “mercado” o de “demanda”. Fundamentalmente es un problema interno de Estados Unidos, su gobierno, sociedad, economía y sistema cultural. Mientras exista esa demanda habrá una oferta. El problema está enraizado profundamente en la sociedad que está fragmentada, en la que el escapismo de la droga se convierte en una forma de vida. La falta de un empleo significativo, de solidaridad social y de mecanismos políticos para conectar el malestar personal con la expresión pública condujo a los ciudadanos estadounidenses a buscar y utilizar drogas.

La “externalización” del problema de la droga tiene un doble valor para Washington: sirve para desviar una crítica profunda a la sociedad y economía estadounidenses, y en segundo lugar, proporciona un pretexto para la manipulación continua de la política, los políticos y los funcionarios militares latinoamericanos.

El método más intervencionista tiene que ver con el tema de la “certificación”. Washington asume el poder de juzgar, evaluar y castigar a los regímenes de acuerdo con sus criterios de cumplimiento en la guerra contra las drogas. Los funcionarios que más responden a las directivas de Washington son “certificados”; aquellos que rechazan la intrusión de Washington son etiquetados como “no cooperadores” o estigmatizados como “colaboradores de la droga”. La “guerra de la droga” dirigida desde Washington fortalece las atribuciones imperiales de Washington de extraterritorialidad, aboliendo los límites nacionales legítimos de los países latinoamericanos. La aplicación de la ley Helms-Burton es otra expresión de la misma atribución de “extraterritorialidad”: la ley estadounidense como la ley del planeta.

La guerra contra las drogas orquestada desde Washington va así más allá del “neocolonialismo”, hacia un retorno al dominio colonial.

El nuevo colonialismo

El intento por parte del gobierno estadounidense de hacer de su legislación (la ley Helms-Burton) la suprema ley del planeta (lo que en términos legales se refiere como extraterritorialidad) refleja la importancia creciente de los

intereses imperiales para definir la política exterior de Estados Unidos. Esta imposición está inserta en un contexto de penetración *de facto* de Estados Unidos en los escalones más altos de los aparatos ejecutivo, militar y de inteligencia de los estados latinoamericanos. En tanto que la mayoría de los comentaristas han criticado los controles financieros ejercidos por los bancos estadounidenses, en particular durante la crisis de la deuda, y otros autores citan la amplia influencia ejercida por Estados Unidos a través de su poder compartido en el Banco Mundial y el FMI, pocos analistas han relacionado estas poderosas palancas económicas con las fuerzas militares organizadas en América Latina bajo el mando de Estados Unidos, una meta fijada en los sesenta y setenta, pero imposible de cumplir hasta ahora. En México, Bolivia y Colombia, los embajadores y el Departamento de Estado de Estados Unidos determinan por rutina cuáles funcionarios militares y ministros del gabinete son “aceptables” (certificados) y cuáles deben ser despedidos (no cooperativos). Rutinariamente, los funcionarios del Poder Ejecutivo cumplen con las demandas estadounidenses. En todos estos países, aquellos funcionarios incluidos en la lista negra de Estados Unidos, son candidatos a que se les retire del cargo público, y una vez que esos funcionarios son retirados se acelera el ritmo de la puesta en práctica de las políticas estadounidenses, sea la erradicación de la droga, la represión de los campesinos que producen la coca, o los pagos expeditos al servicio de la deuda.

El fortalecimiento del control estadounidense sobre los asuntos de seguridad interna latinoamericanos tiene un paralelo en la política de Washington de presionar a los gobiernos latinoamericanos para incrementar su dependencia de Estados Unidos mientras que fortalecen sus aparatos represivos internos, policíacos y militares.

Aun en el nivel táctico, los funcionarios del FBI y la DEA dirigen las investigaciones y exigen que los funcionarios latinoamericanos proporcionen servicios de inteligencia. Los funcionarios estadounidenses supervisan las operaciones. Una visita a Chapare basta para desanimar a cualquier observador de la soberanía del Estado boliviano. Incluso las operaciones cotidianas son supervisadas por aproximadamente una docena de funcionarios de la DEA que trabajan ahí. En Chapare, Bolivia, y en el Valle Superior de Husallaga, en Perú, no hacen esfuerzo alguno por disfrazar quién está a cargo de dirigir las operaciones. Y la mayoría de los generales y presidentes están bastante conscientes del hecho de que la etiqueta estadounidense (“traficante de drogas”) puede costarles su puesto. La tremenda influencia en el nivel presidencial se hace evidente en el entusiasmo del presidente Samper por intensificar la erradica-

ción de los sembradíos campesinos y del presidente mexicano para hacer pagos adelantados de la deuda a pesar del creciente empobrecimiento de millones de compatriotas.

La “guerra de las drogas” de Washington está dirigida a incrementar el poder estadounidense en América Latina. El dinero de la droga lavado por los bancos estadounidenses financia los desequilibrios comerciales de Washington. La guerra de la droga incrementa la influencia general de Washington sobre las políticas económicas, permitiendo a las TNC estadounidenses comprar empresas públicas latinoamericanas a precios escandalosamente bajos y penetrar los mercados. Todas las compañías petroleras importantes de propiedad pública que son lucrativas están en la lista de ventas, en Brasil, México, Venezuela, Bolivia, etcétera. Las zonas de maquiladoras, y otras zonas de mano de obra barata, se están tornando en emblemáticas de la estrategia económica de Washington para el “crecimiento de las exportaciones” de América Latina. Entre 1983 y 1993, las exportaciones de los servicios de los medios estadounidenses se incrementaron en 138 por ciento, en comparación con las exportaciones totales de servicios que crecieron sólo el 90 por ciento. Los bienes de exportación de los medios estadounidenses se incrementaron en un 210 por ciento, mientras las exportaciones totales de bienes se incrementaron sólo en 110 por ciento. Las corporaciones estadounidenses están activas en los negocios de bienes raíces al igual que en los de venta al detalle, y en los centros comerciales. La militarización apoyada por Estados Unidos está dirigida a salvaguardar el pillaje en América Latina. El nuevo imperialismo no es “neocolonial” en su forma; implica control ejecutivo directo ejercido a través de una estructura de mando de rutina a través de los funcionarios ejecutivos latinoamericanos evaluados según los criterios estadounidenses de responsabilidad y efectividad.

El nuevo imperialismo intenta fortalecer su decadente posición global a través de la explotación más intensa de las economías latinoamericanas. En el proceso ha establecido dos nuevos medios para limitar el descontento: una ideología y una red organizacional. La ideología de la “globalización” y la promoción de las ONG sin fines de lucro. La primera es para mistificar a los intelectuales para que se sometan antes de la ola inevitable del futuro, la segunda para dar a los intelectuales los medios para dismantelar al Estado benefactor nacional.

No obstante, el alcance y la profundidad de la penetración continúan mirando a un círculo cada vez mayor de clases sociales: la bancarrota de empresas medianas y pequeñas, los empleados públicos de movilidad descendente,

los campesinos desplazados, los trabajadores industriales temporales o de bajos sueldos. Incluso sectores minoritarios de los intelectuales han comenzado a revivir poco a poco la noción del imperialismo como un concepto central para el análisis y la política. Pero este último movimiento es muy tentativo y está confinado a círculos muy limitados. La pieza central de la oposición a las ambiciones imperiales estadounidenses está localizada en el campo: en Brasil, en el movimiento de trabajadores sin tierra (MST); en México, los zapatistas de Chiapas, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de Guerrero y los movimientos campesinos de Oaxaca. La oposición más significativa se encuentra, sin embargo, en Colombia con las FARC y sus 20,000 guerrilleros, cuya influencia se extiende a más de 600 de las 1,200 municipalidades del país.

La razón por la que Estados Unidos ha concentrado su campaña antidrogas en Colombia es porque Washington teme que se convierta en su segundo Vietnam. La exigencia de Washington para que el presidente Samper conduzca una guerra total contra las drogas está relacionada con la creciente influencia de las FARC entre el campesinado y su creciente proximidad a Bogotá. Después de 30 años de lucha, las FARC han consolidado su base y son capaces ahora de bloquear carreteras a 40 millas de la capital.

De ahí que la guerra antidrogas de Washington esté profundamente entrelazada con su política antirrevolucionaria; su ayuda militar está dirigida sobre todo a destruir los vínculos campesinos con las FARC. Al erradicar la coca, promover importaciones baratas y reprimir las organizaciones campesinas, Estados Unidos y el ejército colombiano esperan sacar a los campesinos del campo y aislar a la guerrilla. Los resultados de esta política han sido contradictorios; mientras que algunos campesinos huyen de la violencia de las fuerzas paramilitares, otros se unen a la guerrilla. La política de Washington para polarizar la sociedad colombiana ha tenido un muy profundo efecto al destruir el tejido social de la sociedad.

La lógica de la expansión de los nuevos movimientos campesinos está relacionada íntimamente con las transformaciones internas del campesinado (política, cultural y económicamente), al igual que lo está su resistencia dialéctica a la entrada cada vez más profunda de las exigencias imperiales. El "campesinado" actual está orientado a la vez hacia el "mercado" y el "trabajador". El acceso al crédito, los mercados y la ayuda técnica de los pequeños productores está vinculado con el incremento de sus condiciones de clase como trabajadores asalariados. El desplazamiento de los campesinos educados (autodidactas o con educación formal) vinculados con los centros urbanos genera un nuevo campesinado con habilidades organizacionales y de medios

modernos que vinculan las actividades agrícolas con los estilos urbanos de combate de clase.

Sería un serio error descartar a los movimientos campesinos contemporáneos como el último aliento de rebelión antes de que desaparezcan del mapa. La persistencia y enraizamiento del campesinado y el creciente desplazamiento de los trabajadores urbanos, las ciudades con altas tasas de criminalidad, y la decadencia de los servicios sociales han reducido el abismo entre el campo y la ciudad. A medida que los movimientos realizan tomas de tierra y construyen comunidades, podría darse una estabilización, si no es que una reversión de la migración rural-urbana. No hay una lógica histórica inherente que obligue al cambio demográfico... en gran parte, es una cuestión política. Las regiones centrales afectadas por la penetración imperial están en el campo por medio de la subordinación del Estado a las obligaciones imperiales: pago de intereses, represión de los productores de coca, subsidio de los conglomerados de agroexportación, están dirigidos todos por el Estado.

La dinámica fundamental de la resistencia constituye el “producto final” de esta cadena de explotación del Estado imperial. Es en ese punto final en el que está ocurriendo el proceso inverso de resistencia y transformación.

El proceso de construcción imperial no es el resultado de eventos coyunturales o de políticas particulares, sino que refleja profundos procesos estructurales incorporados en el sistema productivo y en los saldos de ganancia de las principales instituciones económicas en el pináculo del sistema económico estadounidense.

Hasta el momento, el imperio ha florecido como nunca antes: las condiciones de la apropiación mineral, el acceso a los mercados, bajos costos de mano de obra, y la influencia sobre los gobiernos y los ejércitos nunca ha sido mejor en el siglo xx. El espacio de las “reformas” es casi inexistente dentro de la fórmula imperial de los libres mercados, los regímenes electorales y el control militar. El dialéctico polo opuesto, sin embargo, es la caída de las fuerzas mediadoras del sector urbano medio y la rápida acumulación de trabajadores y empleados públicos en proceso de movilidad descendente que se acercan a los polos de la acción social directa. Es en este ambiente de excesos imperiales, acumulación sin precedente de la riqueza, y la degradación masiva del trabajo, que los nuevos polos de la acción social en el campo están ganando influencia política y prominencia nacional.

El giro fundamental de los temas agrarios a la transformación social se construye en torno a la renovación de la praxis socialista que vincula la autonomía cultural y la producción a pequeña escala con el control sobre las alturas

estratégicas de la economía. Ello sólo puede convertirse en una realidad cuando el socialismo se haya integrado en las formas endógenas de las prácticas culturales y sociales, y siempre que los principales productores estén imbuidos con el nuevo valor de la igualdad de género y la compatibilidad ambiental. El imperio ha golpeado y derribado el tejido económico, cultural y político de las sociedades latinoamericanas. Ha asimilado a los pocos y explotado a los muchos.

Pero ahora la izquierda ha regresado el golpe. Desde los pueblos de Colombia y Bolivia, pasando por los precarios asentamientos rurales de Brasil, hasta las selvas de México, está tomando forma un nuevo movimiento que escribe su propia historia y practica su propia teoría.

Conclusión

Desde extremos opuestos del espectro político y económico, dos fuerzas dinámicas se encuentran en un tono creciente de confrontación: los campesinos contra el imperio estadounidense. La dinámica detrás del imperio estadounidense está construida en torno a imperativos económicos internos y oportunidades político-militares externas. La expansión dinámica de los nuevos movimientos campesinos está centrada en las transformaciones económicas, culturales y sociales que han transformado a los “campesinos aislados” en una fuerza cohesiva, con conciencia de clase y revolucionaria.

El patrón de construcción del imperio está constituido en torno a la extracción de renta en forma de pagos de interés, el saqueo de los recursos naturales y la transferencia a gran escala de la propiedad pública a las TNC. Estas fuerzas en conjunto han generado una tremenda presión sobre el sistema social latinoamericano para aumentar la extracción del valor, del ingreso y de la mano de obra de los trabajadores y campesinos. En este proceso de extracción y apropiación, las “provincias” y las áreas rurales han sido golpeadas duramente en la medida que “la estructura del poder local” se sitúa en las ciudades centrales. La intensificación de la explotación se acompaña por la penetración de mercancías culturales que facilitan la fragmentación y la alienación, en particular de los grupos urbanos desposeídos. La dinámica de la explotación y la fragmentación acompaña la circulación de “ideologías de mercado” apoyadas por el imperio a través de las ONG y los grupos de intelectuales que generan una división entre los profesionistas de clase media, los intelectuales y el trabajo. El bloque hegemónico imperial es fortalecido por la naturaleza “sobredeterminada” de la influencia estadounidense en las instituciones militares y policíacas en gran parte a través de las campañas antidrogas.

El impulso subyacente de la construcción del imperio estadounidense está determinado por la dependencia decisiva de las grandes TNC estadounidenses respecto a las ganancias en el extranjero y la economía estadounidense con cuentas favorables con América Latina para compensar el déficit con Asia y Alemania. La “campana antidrogas” está en el centro del proyecto imperial de Washington. Pero en Colombia enfrenta un serio desafío en la movilización campesina y los grupos guerrilleros revolucionarios.

